

*Violencia. Gobernabilidad, participación social,
nueva ciudadanía en Argentina de las últimas décadas*

Lic.Mg. Dalmira Pensa.- Cr.Mg. Leila Andalle.
Facultad de Ciencias Económicas.

Resumen

La violencia, expresada en el ámbito privado o público, aparece como una manifestación relevante en un contexto de pérdida progresiva de legitimidad de instituciones y actores que ocupan posiciones de gobierno y de construcción de diferentes formas de participación social.

El análisis considera cuatro dimensiones que tendrían activa intervención en el fenómeno observado, influyendo en la conformación de nuevos patrones de conducta individual y grupal, volviendo cada vez más agresivos los comportamientos.

Los medios de comunicación –atendiendo a su particular imbricación con el consumo- se constituyen en una expresión particular del espacio público, por donde se cuele la “sociedad del poder”, construyendo una naturalización de la violencia. La magnitud del dinero, en particular del dinero “en negro”, su relación con otras manifestaciones delictivas y la correlativa incapacidad de intervención de un Estado en retirada, proporcionan otra vía explicativa a situaciones de enfrentamiento de patrones de convivencia social. Fuertes cuestionamientos desde la sociedad civil sobre los mecanismos de representación política y aún de los mismos procesos de representación, muchos de ellos originados en situaciones de extrema desigualdad, instalan a movimientos sociales que operan como nuevas expresiones de articulación de lo público y que a menudo recurren a maneras violentas para poner en la agenda sus visiones.

Estas expresiones, por demás complejas, resultan renovados en sus exigencias a partir de los procesos de globalización, donde la gobernabilidad resulta puesta en jaque, y requieren una mirada analítica a los fines de reconocer sus orígenes y también su evolución.

Acerca de la gobernabilidad y su vinculación con la violencia

¿Hasta qué punto la falta de gobernabilidad actual se vincula con problemas crónicos de violencia explícita observados en nuestra historia reciente?, ¿Cuánto de las manifestaciones que ponen en jaque al sistema político se corresponden con diversas manifestaciones de la globalización?

¿Puede sostenerse un sistema institucional que viola desde su organización básica principios de equidad, excluyendo del acceso a los bienes esenciales para su subsistencia a una masa importante de personas?.

Si como señalara Freud, la civilización sería una manera muy insuficiente de sublimar los instintos de muerte y destrucción, la palabra y la política son los principales instrumentos con los que cuenta para forjar el universo simbólico y, con ello controlar las pulsiones destructivas. A través de un retorno sobre sí mismo el ser humano recupera la palabra y, con ello, nace la "política". “La política es uno de los mayores logros de la civilización, pues es mediante ella que el ser humano, gracias al don de la palabra, controla la violencia y humaniza sus relaciones con el entorno, haciendo que el derecho a la vida no se traduzca en su capacidad de ejercer el terror y sembrar la muerte. En otras palabras, que para

no morir el hombre no se vea abocado a matar, de modo que el vivir no sea más que sobrevivir. Por el contrario, la política hace del vivir un convivir”.(Mora Rodríguez, 2003).

En esta construcción para la convivencia, uno de los pilares básicos está asentado sobre la idea de democracia, a través del conjunto de derechos y garantías que ella ofrece para vivir en lo que se concibe como una sociedad organizada.

El Estado democrático, para cumplir con ese rol, debe acudir a una serie de potestades y prerrogativas que su propia naturaleza le concede. Entre ellas la de crear y aplicar leyes, haciéndolas cumplir mediante mecanismos que van desde la persuasión hasta la coerción física. Para ello cuenta con el monopolio del uso legítimo de la fuerza pública, hecho que lo convierte en un instrumento crítico al momento de hablar de violencia.

La violencia se perfila como uno de los problemas de mayor preocupación para los ciudadanos argentinos, sea en sus manifestaciones de inseguridad, violación de derechos humanos, o delitos en general como la corrupción. A tal punto es un tema sensible que el actual presidente consiguió remontar su exiguo respaldo de votos de un 23% hasta un 80% en su gestión, tomando las banderas de “juicio y castigo” a los viejos genocidas revisando las leyes de Obediencia Debida y el Indulto y – encarcelando a Videla y Astiz-, o abriendo el juicio a miembros de la Corte Suprema, señalados como cómplices de un sistema que desde hace 25 años garantiza la impunidad de los criminales.

Este es un problema que se extiende a toda América Latina, donde cada año mueren más de cien mil personas por causa de la violencia, siendo ésta la primera causa de muerte de las personas de entre 15 y 44 años de edad (Briceño- León, 2002). Su presencia en la sociedad crea angustia en los seres, que viven atormentados por el temor a ser víctimas de personas con las cuales conviven. Esto, sumado a la violencia organizada como la corrupción y el narcotráfico, representa uno de los problemas principales que afecta a diversos grupos sociales y se expresa en la aparición de organizaciones y en otras manifestaciones que ya se han constituido en parte habitual del “paisaje” urbano de estos días.

A las explicaciones de tipo psicológico acerca de las conductas violentas, se suman otras desde el campo de la sociología, éstas señalan la ausencia de proyectos colectivos capaces de ofrecer perspectivas sublimadoras como los disparadores. Ya en 1973, en una entrevista con Le Nouvell Observateur, Herbert Marcuse señalaba que el desarraigo existencial de los obreros americanos corroe el proyecto o basamento ideológico del sistema capitalista, atentando contra su funcionamiento.

“El ausentismo creciente, la desmoralización de la clase obrera o el rechazo a un trabajo alienante atentan contra el funcionamiento del sistema”, decía Marcuse. También afirmaba entonces que “si los fenómenos contra-culturales o críticos no estaban ligados a una práctica política revolucionaria, fuertemente arraigada en la transformación profunda del hombre, tanto de su conciencia como de su inconsciente -de sus sentidos, de su sensibilidad-; esa contra-cultura degenera en nuevas formas de egoísmo, en la búsqueda de una salvación individual, en conductas de huida de la realidad, en el consumo de drogas...”. Y es precisamente –continúa Marcuse- “porque estas formas de rechazo no impiden existir al sistema y seguir actuando por lo que la sociedad se torna esquizofrénica: los hippies por un lado, y por otro, la violencia y el genocidio.”

Tres décadas más tarde nos encontramos con las mismas manifestaciones “esquizofrénicas” en la sociedad: los manifestantes antiglobalización reclamando por la paz y la construcción de “otro mundo”, a la par de expresiones brutales de violencia que parecieran casi sin sentido y guerras (o invasiones) que atentan contra los más elementales principios del orden institucional internacional trabajosamente sostenidos por más de cincuenta años.

Siempre la violencia en el eje que une los extremos, y el Estado incapaz o cómplice aunque siempre responsable por ella. La violencia como expresión inexorable del fracaso de un sistema que encuentra su razón de ser en el mantenimiento del orden. La violencia como respuesta al uso de la fuerza con excusas de paz mundial. Por ello, ¿hasta qué punto puede ser la violencia explícita la máxima expresión de la resistencia a formas de violencia implícita?

Desde estos interrogantes resultan insatisfactorias aquellas explicaciones, y consecuentes políticas, que consideran la violencia como una cuestión propia de la marginalidad y/ o que la resuelven aplicando los códigos de la represión.

La violencia que aparece como tema de agenda de la mayoría de los estados latinoamericanos, es aquella que se manifiesta de manera explícita, protagonizada por grupos marginales y excluidos del sistema por diversas causas inherentes al mismo. La violación a la propiedad privada, los atentados contra las personas, secuestros, extorsiones, etc. Difícilmente esas agendas se ocupen seriamente de la violencia que la sociedad y el sistema, más aún el propio Estado, ejercen sobre esos mismos grupos u otros más vulnerables. Mucho menos probable es que se considere su vinculación con la existencia de grupos que sobrepasan el poder de cualquier Estado y que ejercen violentas presiones para lograr sus objetivos corporativos. Los estados hoy asisten atónitos a la apocalíptica violación de controles elementales por parte de poderosos empresarios, encubiertos por inescrupulosos funcionarios, en búsqueda de un caudal de beneficios producidos por actividades ilegales, violando y violentando los sistemas económicos de los países, extrayendo de ellos excedentes que representan casi toda la capacidad de producción de valor de esas sociedades, como lo estamos viendo por estos días en Bolivia.

Si bien es frecuente detenerse en las manifestaciones “materiales” que asume la violencia, no podemos desconocer sus expresiones simbólicas y las acciones derivadas de esto. En tal sentido, los medios de comunicación resultan un espacio destacado por donde se cuelan innumerables expresiones violentas y hasta se expresan ideas y valores que la justifican o la utilizan para otros fines.

En este escenario podemos considerar algunas dimensiones de análisis que nos permitirían acercarnos a explicaciones al fenómeno observado, a la par que imaginar algunas implicancias en torno a la problemática de la reconstrucción de una estatalidad.

Corrupción, lavado de dinero y globalización

La globalización ha producido una competencia entre los estados para capturar capitales financieros, líquidos, volátiles, fugaces, que circulan por el globo en búsqueda de paraísos fiscales o paraísos legales donde establecerse, sin restricciones a su manejo y flujo.

El capital financiero es el que domina el imperio por encima de los mercados, el trabajo y los gobiernos, tal como lo predijo Lenin, pero sin suponer que la “etapa superior del capitalismo” estaría plagada de dinero negro que circula por las redes financieras mundiales y que drena recursos desde países generadores de excedentes, provenientes de actividades ilegales a países que son paraísos fiscales y legales, a fin de insertarse luego en los circuitos de la economía formal, allí donde se les ofrezcan mayores garantías de rentabilidad. La magnitud del dinero, en particular del **dinero “en negro”**, su relación con otras manifestaciones delictivas y la correlativa incapacidad de intervención de un Estado en retirada, proporcionan una vía explicativa a situaciones de enfrentamiento de patrones de convivencia social.

Según Naciones Unidas, en el mercado internacional de capitales entran entre 300.000 y 500.000 millones de dinero sucio cada año. Estiman a su vez, que anualmente se lavan 600.000, una suma equivalente al PBI español o casi un año de exportaciones estadounidenses.

Si observamos estas cifras comprenderemos porqué resulta tan atractivo el negocio del narcotráfico: el precio de un kilo de opio en el campo pakistaní es de 90 dólares; el kilo de heroína en el mercado minorista de los EEUU es de 290.000 dólares (The Economist; “A Survey of Illegal Drugs”, 28-7-2001). Según GAFI (Grupo de Acción Financiera) o FAFT (en inglés), un organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero) el narcotráfico es la principal fuente de dinero sucio. Pero casi

tan importante como éste o más, es el dinero negro proveniente de los crímenes financieros (fraudes financieros, quiebras fraudulentas, comisiones ilegales, etc.).

Una medida interesante de la relevancia de las transacciones ilegales en las cuales se esconden las actividades criminales, está dada por la gran magnitud de la economía en negro. En los países subdesarrollados la economía subterránea se estima en porcentajes que van desde el 20%, en unos al 76% del PBI en otros. En los países desarrollados de la OCDE oscila entre el 5% y el 28% . (Sevares, J; 2003). Estos datos parecen indicar que los negocios ilícitos son una exclusividad de los países menos desarrollados, pero si tenemos en cuenta casos como Enron; World Com, con Arthur Andersen; IBM y el Banco Nación, en Argentina, podemos verificar que el fraude y la corrupción se pergeñan en los ámbitos del capitalismo más sofisticado.

Los principales actores de estas economías en negro, operaciones ilegales o irregulares no son *sólo* las mafias organizadas y empresarios aventureros. Solos no podrían, necesitan de la complicidad de líneas enteras de funcionarios de los sistemas políticos, organismos públicos de seguridad y militares que han perdido el sentido trascendente de su función y son ganados por valores tales como el éxito, el enriquecimiento individual y la preservación de las redes delictivas conformadas por la elite a la que pertenecen. También en su rol de gobernantes, deben mostrar a sus gobernados la capacidad para atraer inversiones, aunque por detrás, nada tengan que ver éstas con la producción y el trabajo. También, empresas prestigiosas y bancos de primera línea que trabajan en los circuitos legales de la economía transnacional, colaboran en estos procesos mediante sus conexiones entre países centrales y periféricos. Estafas financieras, fraudes y demás delitos económicos rondan las economías subdesarrolladas generando en ellas focos endémicos de corrupción que han desgastado las estructuras sociales, principios éticos y hasta la soberanía económica y financiera de países pobres. La sociedad colombiana, por ejemplo, es acusada sistemáticamente por sus fenómenos violentos por parte de los cartels asociados a la producción de marihuana, pero nadie explica quiénes están detrás del negocio que se inicia con la fase de producción de la materia prima; quién o quiénes presionan por el lado de la demanda. Los principales organismos internacionales encargados de combatir el narcotráfico están conformados por países que al interior de sus sociedades no pueden controlar el consumo de drogas, sino por el contrario de acuerdo a ciertas pautas de vida y consumo, no hacen otra cosa que inducir a ese comportamiento a la mayor parte de sus integrantes.

Lo que algunos denominan actualmente narcodemocracias, sumados a las dictaduras de los mercados y estados débiles, que sólo pueden ser funcionales a las exigencias e imposiciones de los grupos organizados en torno al sostenimiento de las redes de poder que los sustentan, aportan elementos que reproducen cada vez con mayor intensidad esta lógica perversa que sume a una gran cantidad de países pobres a perpetuar sus condiciones de supervivencia social.

Durante décadas los países periféricos han sido productores de materias primas de escaso valor agregado. Sabemos que el valor más importante que se agrega a los productos reside en el trabajo humano y sabemos que, de acuerdo a la calidad y cantidad de trabajo que aporte como país, será la participación que como factor de la producción reciba en conjunto. Esta distribución de excedentes mundiales ha sido en la mayoría de los casos desbalanceada a favor de los países desarrollados que siempre han tenido mayor capacidad de industrialización de productos y además de negociación, por ende de ventajas comparativas dinámicas muy fuertes. Pero cuando hablamos de economía en negro todas estas condiciones se encuentran exacerbadas, ya que todas las categorías y factores se desvirtúan, todo se distorsiona y se restringe la capacidad de efectuar juicios de valor acerca de cómo se distribuyen los beneficios de una actividad. La mayoría de los organismos internacionales que miden estos indicadores lo hacen sobre la base de supuestos, inferencias o información cruzada con otras variables o indicadores.

El problema que se agrega es que también distorsiona los mercados de la economía formal o legal, porque nadie -ningún empresario honesto- tiene posibilidad de competir con empresas montadas sobre

la base de financiamiento que proviene de lavado de dinero, a las cuales no les importa perder pues la reconstitución de sus capitales proviene de otras fuentes. Esto se complejiza con la capacidad de soborno que tienen las redes de complicidad montadas para lograr impunidad, exenciones impositivas, o leyes que los favorezcan.

Entonces, mientras en la Organización Mundial del Comercio se debate acerca de los subsidios que sobreprotegen a algunos sectores y ponen límites al libre comercio, distorsionando precios y condiciones de mercado, por la puerta de atrás de la economía se producen distorsiones abrumadoras cuyo costo de oportunidad siempre es el bienestar de porciones más grandes de la población mundial.

A menudo asociado al problema anterior encontramos el tráfico de armas. En él aparecen involucrados altos funcionarios y dirigentes de instituciones de seguridad -militares o políticos- de los estados, y otros miembros de la elite de poder. Con sus transacciones contribuye cada día en cifras millonarias a forzar guerras y conflictos armados en los cuales se exterminan centenares de miles de personas cuyas vidas parecen valuadas a costos inferiores a una bala de fusil. Pero, claro, se caratulan en general como “fuerzas de paz” destinadas *a controlar la violencia generada en el seno de países pobres, incapaces de controlar sus conflictos raciales, religiosos o territoriales...* Es la lógica del mercado (más ganancias siempre y a toda costa) la que se impone a la vieja lógica de guerra (destruir la capacidad de combate del oponente). “Se acabó el tiempo de las justificaciones plausibles, ahora ni siquiera se hace mucho énfasis en las justificaciones ‘morales’ e incluso ‘políticas’ de la guerra”. (Marcos, 2003)

Inclusive el trabajo productivo ha perdido peso específico frente al trabajo en negro que sirve a los objetivos de los sistemas financieros globales. Los flujos de capitales improductivos, se convierten en fines en sí mismos y no como medios o instrumentos para facilitar la producción o el flujo real de bienes económicos que contribuyan a mejorar la vida de los grupos más amplios de la población mundial.

Los Estados, cooptados por estos grupos de poder, se subyugan a los designios poco éticos de su dirigencia, cada vez más deteriorada en su capacidad de orientar a sus países hacia los intereses de las mayorías. “El par dominante-dominado define ahora a la comunidad mundial y pretende ser el nuevo criterio de ‘humanidad’, incluso para los fragmentos más dispersos de la sociedad global. El vacío dejado por los hombres de Estado es llenado, en el holograma del Estado nacional, por los gerentes y arribistas; pero en el orden aparente del capital, los militares de empresas (una nueva generación que no sólo lee y aplica a Tzun Tzu, sino que tiene los medios materiales para realizar sus movimientos y maniobras) incorporan la guerra militar (para diferenciarla de las guerras económicas, ideológicas, psicológicas, diplomáticas, etcétera) como un elemento más de su estrategia de mercado” (Marcos, 2003).

La presencia de organizaciones dedicadas al **crimen o delito común** y la correlativa baja capacidad del Estado para intervenir frente a sus acciones, podría proporcionar otro punto explicativo a los problemas de gobernabilidad. A menudo se considera que estos delitos reconocen sus raíces en prácticas marginales; otras explicaciones, como lo señaláramos anteriormente, muestran que numerosas organizaciones criminales se vinculan a la circulación de una masa importante de dinero “en negro” a través de reconocidas rutas internacionales. Ducrot (1999) sostiene una hipótesis según la cual “el capitalismo sólo es posible a partir de la coexistencia equilibrada de dos masas de capitales, una legal, la otra negra. La primera constituye la base imponible para los presupuestos estatales que financian el gasto público. Pero sin la segunda, sería imposible la inversión privada, el empleo, el desarrollo, en definitiva, el crecimiento.” Si consideramos esta perspectiva, el delito común tiene un basamento en las reglas constitutivas del propio sistema, por lo cual interesa considerar las instituciones del sistema político, tratando de analizar las posibilidades de limitar las prácticas delictivas.

Si nos detenemos brevemente en el caso del lavado de dinero, encontramos un entramado donde intervienen variadas instancias, algunas de las cuales no resultan estrictamente ilícitas aunque

contribuyen con acciones criminales; en el proceso de la “colocación” del dinero negro –producto de acciones delictivas- se recurre a su introducción en el circuito financiero legal, llevando a cabo una serie de operaciones especialmente en los centros *offshore*, por sus políticas permisivas. Luego, para hacer perder el rastro sobre el origen de ese dinero se recurre al proceso de “decantación”, a fin de cortar la cadena de evidencia. Finalmente se llega a la “integración” pretendiendo simular licitud por medio de inversiones aparentemente genuinas, apelando a mecanismos de sobrefacturación o de subfacturación en procesos de comercialización.

Suele señalarse que “la calidad de un político se mide en su capacidad de controlar la violencia”, puesto que, en la medida que el Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima, si sabe ejercerla estará en condiciones de neutralizar a otras fuerzas que cobran el carácter de ilegítimas. El Estado se constituye a sí mismo a partir del derecho que la sociedad le otorga como organismo centralizado para ejercer la violencia como último recurso a fin de promover el bien común. Este ejercicio es controlado por normas legales y éticas. Pero cuando **las mafias** penetran al Estado, éste inmediatamente pierde gran parte de su legitimidad. Tales mafias a menudo se inscriben en formas de crimen organizado, aunque también podemos reconocer otras organizaciones de tipo mafioso que, si bien puede que no promuevan fines ilícitos, al constituirse para defender intereses particulares a cualquier precio, llevan a conductas violatorias de los principios básicos de la organización social.

En nuestro país casos como el PAMI, o las policías, resultan paradigmáticos; las redes que articulan sectores de la burocracia estatal con grupos privados constituyen espacios por donde se desvían fondos que se sustraen al presupuesto público para beneficiar a los integrantes de esas redes.

Manifestaciones semejantes podemos observarlas también a nivel internacional, en el caso del sistema “jurídico” el cual se ha vuelto obsoleto, en la medida que su lugar está siendo ocupado por el sistema espontáneo del capital. Tal lo que ocurre actualmente a partir de la invasión a Irak: donde observamos la competencia brutal y despiadada recurriendo a cualquier medio, entre ellos, la guerra o invasión, para apropiarse de un recurso como el petróleo. Miles de años después del surgimiento de la palabra, y con ella, de la razón argumentada, la fuerza vuelve a ocupar el lugar decisivo y decisorio.

La violencia legitimada

Los medios masivos y en especial la televisión, con su reconocida capacidad para la formación de la agenda pública, la construcción de escenarios sociales y políticos, la instalación de determinados debates, la legitimación y deslegitimación de ciertos temas y personas, construyen y ofrecen el discurso hegemónico. Desde algunas posiciones teóricas se señala que es a través de los medios de comunicación por donde se filtra la “sociedad del poder” (Hardt y Negri, 2002), entendiendo por tal al colectivo de dirección que ha desplazado a la clase política de la toma de decisiones fundamentales. Encuentran que se trata de un grupo que no sólo detenta el poder económico y no sólo en una nación. Más que aglutinada orgánicamente (según el modelo de "sociedad anónima"), la "sociedad del poder" se conforma por compartir objetivos y métodos comunes. Aún en proceso de formación y consolidación, la "sociedad del poder" trata de llenar el vacío dejado por los estados nacionales y sus clases políticas. La "sociedad del poder" controla organismos financieros (y, por ende, países enteros), medios de comunicación, corporaciones industriales y comerciales, centros educativos, ejércitos y policías públicos y privados.

El discurso que legitima este accionar se expresa a través de los medios masivos de comunicación se caracteriza por naturalizar la violencia de manera sistemática y en sus más diversos formatos (noticias, publicidad, novelas, etc.).

En algunos casos desde la perspectiva de la competencia –entre empresas, entre personas públicas o privadas, por mercados, etc.-, en otros desde la exacerbación de los instintos primitivos –supervivencia, odio, venganza-, recurriendo a mostrar los hechos más violentos que ocurren en la sociedad en toda su brutalidad, incluso desde los espacios destinados a la expansión o al entretenimiento, la violencia explícita o implícita a menudo opera desde los medios influyendo fuertemente en las conductas sociales.

Por otra parte, es conocida la relación que entablan las nuevas tecnologías con los procesos de valorización capitalista. En el escenario de la globalización es posible advertir la esencial intervención en los movimientos de capitales; en la nueva organización de la producción atendiendo a las fuentes primarias en relación con los procesos de informatización de la producción y del crecimiento exponencial del comercio; su intervención en los procesos de control tanto a nivel del disciplinamiento del trabajo cuanto en la organización de la vida cotidiana. Así, las tecnologías de la información y de la comunicación están hoy estrechamente ligadas a la extensión de las relaciones capitalistas globalizadas. Esto no significa que el discurso hegemónico sea uniforme y que impida totalmente el ingreso de comunicaciones o personas portadoras de un mensaje que cuestiona el paradigma dominante. En algunos casos, por las grietas que suele dejar se cuelan algunos mensajes que traen las voces genuinas de los oprimidos o los silenciados. En otros casos, ante el desenmascaramiento que sufren sobre sus prácticas de desinformación, de aculturación, de banalización, etc., e intentando mostrarse con apertura a diversas ideas y hasta con generosidad, suelen permitir algunas expresiones que cuestionan sus bases de actuación.

Sin embargo, si el poder en el momento actual reside en la información y el conocimiento, ¿por qué debiéramos suponer que quienes lo poseen lo entregarían generosamente a todos los ciudadanos por igual en una sociedad en la que domina la competencia por lograr mayores y mejores beneficios individuales? La verdadera información se maneja en los círculos privilegiados y prebendarios de la sociedad y es de difícil y complejo acceso para el ciudadano común. El precio de esa información es demasiado elevado para circular en los mercados de los medios masivos, esa información es la confidencial, la realmente útil para algunos intereses particulares de grandes grupos económicos. Estos grupos pagan sumas extraordinarias a quienes manejan información crítica acerca de cambios en las legislaciones, sobre futuras políticas de los gobiernos, actividades de los funcionarios, vinculaciones o alianzas estratégicas entre grupos o facciones. Para el ciudadano común queda el entretenimiento, o la información general atravesados por la incitación al consumo, producto de la avasallante lógica mercantil de los medios.

En la medida que los medios de comunicación están cada vez más concentrados en poder de grupos reducidos, resulta cada vez más fácil el control de la información que se difunde ya que con unos pocos contactos se filtra todo lo que circula en amplias cadenas multimedias. En el caso de la invasión a Irak vimos el control ejercido en los correos electrónicos, así como la destrucción del sitio de Al Jazeera y de páginas críticas de Estados Unidos y/o Europa –Yellowtimes y otras. Otro ejemplo, en Internet, lo constituye el Echelon, un software que hace las veces de policía en el ciberespacio, a partir de contar la cantidad de veces que aparecen palabras “peligrosas” como “imperialismo” y “Bush”, en los mensajes. Amenazando con ser sólo el comienzo de proyectos concurrentes hacia la distopía orwelliana.

En síntesis, las comunicaciones son condiciones de existencia de las nuevas formas de acumulación y regulación - que a su vez las instituyen -; refuerzan sus efectos de dominación y efectivizan entre otras cosas, el control en los procesos de trabajo, la vigilancia y el disciplinamiento social.

Surgimiento de nuevas institucionalidades

Ante estas situaciones la sociedad civil efectúa fuertes cuestionamientos, sobre los mecanismos de representación política y aún de los procesos de representación mismos. En correspondencia con manifestaciones de extrema desigualdad, se instalan movimientos sociales que operan como nuevas expresiones de articulación de lo público los que a menudo recurren a maneras violentas para poner en la agenda sus visiones.

Responden así, a otras formas subliminales de violencia generada desde la elite del poder, como la desocupación, la desnutrición, la falta de atención médica, la insatisfacción de necesidades básicas de la población, la privación de derechos económicos e incluso la inestabilidad política, y se movilizan por toda la geografía tratando de hacer efectivos sus derechos y, fundamentalmente, poner de manifiesto que “otro mundo es posible”.

Piqueteros, asambleas populares, redes que conectan diversos grupos, cuestionan los pilares del régimen político percibido como el mecanismo posibilitador de situaciones sociales hartas e injustas y destructoras de ciudadanía.

Estos movimientos no sólo expresan manifestaciones violentas, en muchos casos al poner como eje la exigencia de una práctica social democrática a su interior comienzan a instalar cuestionamientos a procedimientos e instituciones políticas –tal lo que ocurre hacia ciertos mecanismos de representación o de control- que impactan en la gobernabilidad.. El movimiento piquetero, el de los productores sin tierra, el de las fábricas recuperadas se inscriben dentro de la compleja trama de la “nueva institucionalidad”.

En nuestro país esta crisis de representación llegó a los sectores sociales de la mano de la crisis económica y social y toda la década del 90 estuvo surcada por acontecimientos que anunciaban la ruptura con las principales instituciones sociales vigentes hasta allí.

Estudios de la CEPAL (2000), indican que “es el empobrecimiento lo que ha hecho que en 1998 en 13 de 18 países de la región el salario mínimo fuera inferior al de 1980, y que el número total de pobres superase los 220 millones de personas” Según esta misma institución, el desempleo en América Latina pasó de 5,7% en 1990 a 9,5% en 1999; más aún, de cada diez empleos que se crearon entre 1990 y 1997, siete se originaron en el sector informal, lo que significa una doble exclusión laboral ya que hay menos empleos y los que surgen tienen un carácter precario. Esto ha llevado a hipotetizar que es el *empobrecimiento y la desigualdad*, y no la pobreza en sí misma, lo que origina la violencia urbana que estamos presenciando. (Briceño-León, 2002).

Sin embargo no sólo se trata de una cuestión económica. La gran mayoría de las personas y los grupos movilizados por los diversos rincones del planeta buscando la construcción del “otro mundo posible” lo hacen desde una perspectiva colectiva, desde un reconocimiento de lo negativo que resulta el individualismo, desde la necesidad de recuperar los intereses del grupo frente a los particulares.

Cuando los trabajadores, los desocupados, los campesinos, las mujeres, los migrantes, los ecologistas, se movilizan por derechos propios, no lo hacen por el derecho individual y por cierto absolutamente lógico y justo de no morir de hambre, de tener una porción de tierra para trabajar y vivir, de defender su derecho individual como mujer, campesino, etc., sino que actúan desde una perspectiva de integración de lo colectivo, desde una mirada más racional en la medida que ella incorpora a otros que son semejantes y con ellos a un pasado y un futuro que conforman de manera integral este presente.

Esta tarea de integración social que en la modernidad estaba casi exclusivamente a cargo del Estado, pasa ahora a ser espacio de disputa por parte de ciertas organizaciones. La sociedad empieza a “revisar” aquel derecho de ejercer la violencia –como último recurso- que cedió en aras de promover el bien común. Cuando las normas legales y las instituciones no resultan eficaces para promover un estado de

cosas mejor al estadio social anterior al de la organización estatal, el principio de libertad, que determinó aquella cesión, hace retornar el ejercicio del poder a la sociedad.

Gobernabilidad o Nuevos espacios de gobernabilidades?

Cuando se pierde el horizonte de superación individual y colectiva porque el Estado ya no se aprecia como instancia promotora del bien común, como lo señala el Sub-comandante Marcos “el individuo se desdibuja de tal forma que ni la imagen de los "héroes" de antaño puede ofrecerle la mínima esperanza de sobresalir. El self-made man no existe más, y puesto que es impensable hablar de self-made corporation, la expectativa social se halla a la deriva. ¿Cuál es la esperanza? ¿Volver a la disputa por la calle, el barrio? Tampoco, con la globalización la fragmentación ha sido tan despiadada y descontrolada que ni siquiera esas unidades mínimas de identidad se mantienen estables. ¿La familia-casa? ¿Dónde y cómo? Si la televisión entró como reina por la puerta principal, Internet entró como golpista por la hendidura del espacio cibernético. Hace pocos meses, casi cada casa del planeta fue invadida por las tropas británicas y norteamericanas que ocuparon Irak” (Marcos, 2003).

Así, la violencia expresada en el ámbito privado o público, aparece como una manifestación relevante en un contexto de pérdida progresiva de legitimidad de instituciones y actores que ocupan posiciones de gobierno y de construcción de diferentes formas de participación social. Amplios sectores sociales que ven desaparecer su capacidad de integrarse a un sistema que les ofrezca un futuro aceptable, ganan las calles para subsistir y/o morir o para protestar, desconociendo o violando instituciones, cuando no creando nuevas.

Otros individuos o grupos que no se ven identificados con movimientos sociales, pero tampoco integrados al sistema dominante recurren a prácticas marginales, delictivas, y hasta mafiosas tratando de gestar salidas a sus situaciones que interpretan de carácter individual o a lo sumo grupal. A semejanza de lo que ocurre con los anteriores, cuestionan de manera directa o indirecta las instituciones del sistema político, poniendo en crisis el régimen, cuando no el propio sistema.

Los primeros reconocen y explicitan a menudo los mecanismos (legitimadores) a los cuales se recurre desde el poder para justificar los abusos, la indiferencia al bien común y hasta las prácticas corruptas, por lo cual disputan al gobierno el ejercicio del poder reduciendo los márgenes de gobernabilidad; los segundos ignoran deliberadamente los dispositivos legales, apelan a diversos recursos para burlar a las instituciones, violan todo tipo de límites y reglas impuestas por lo que reconocen como autoridad, se rebelan indirectamente poniendo también en jaque la vida propia cuyo valor parece diluirse frente a la realidad.

Es en este momento, o punto de inflexión, de dificultad y/ o incapacidad del Estado para conducir procesos de organización e integración social, asociado al fenómeno de la globalización, que la sociedad ha generado espacios de participación activa en el campo de lo público y aparece completando el análisis en cuestión. Y es en ese mismo punto donde los gobiernos debieran plantearse hasta qué punto es posible recuperar o reconstruir la gobernabilidad con las características que se conoce hasta hoy. No parece sencilla la tarea de reinventar nuevas formas de gobernabilidad en las que se contemplen formas de participación más amplias capaces de contener toda la diversidad que componen las sociedades civiles actuales, que contemplen las intervenciones de diversos actores sociales que a menudo tienden a reemplazar al Estado en funciones que hacen a la equidad o hacia el control de lo público.

Es al parecer el momento en que la sociedad del poder, debe rendirse a que el ser humano no puede ser considerado única ni ambiguamente como cliente o delincuente. Para “adocenas al primero y eliminar al segundo, (para lo cual) el político da rostro legal al uso ilegítimo de la violencia del poder”(Marcos).

Parece ser el momento en que la imaginación de la sociedad civil supera la fuerza de sus dirigentes y los obliga a repensar nuevamente las bases de los acuerdos que funden un nuevo contrato entre las distintas identidades y grupos que conforman esa sociedad. Ellos son quienes la construyen, la producen y por tanto debieran ser quienes la modelen en torno a sus propias demandas y necesidades colectivas. Si la clase dirigente no inventa nuevas formas de gobernabilidad, éstas se irán creando en torno a estas nuevas formas de explicar la realidad, que la sociedad trae a la conciencia de los individuos, soslayada o contundentemente. No tenemos la respuesta final a algunos interrogantes, pero proponemos simplemente un horizonte de discusión donde se puedan rescatar las transformaciones que se manifiestan actualmente (y cuya tendencia parece ser la consolidación y la profundización de estos espacios) y donde haya lugar para la discusión y fundamentalmente para el ejercicio de una democracia real donde la regla principal sea la devolución de ciertas porciones de poder que la sociedad otrora delegara en sus representantes. Esta sociedad local tomará esas porciones de poder para aplicarla a distintas gobernabilidades que puedan canalizar de modo más real la diversidad, a la vez que permita compensar las inmensas desigualdades que hoy la oprimen y le impiden desarrollar y evolucionar hacia formas de convivencia más adecuadas y equitativas para el conjunto.

Bibliografía

- Baczko, Bronislaw** (1999). *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas*. Ed Nueva Visión. Buenos Aires, 1999.
- Briceño- León, Roberto**. *Compilador* (2002). *Violencia, Sociedad y Justicia en América Latina*. Clacso. Buenos Aires, 2002.
- CEPAL**. (2000)
- Delmas, Philippe** (1996). *El Brillante Porvenir de la Guerra*. Ed. Andrés Bello. Santiago de Chile, 1996.
- Ducrot, Victor**. (1999). *El color del dinero. Las rutas financieras del poder*. Ed. Norma. Buenos Aires, 1999.
- Hardt, M y Negri, A.** (2002) *Imperio*. Ed. Paidós. Buenos Aires, 2002.
- Katz, Claudio** (2003). "El modelo sigue en pie" Ponencia al III Coloquio Latinoamericano de Economistas Políticos. (septiembre 2003).
- Marcos (subcomandante)**, *El mundo: siete pensamientos en mayo de 2003*. en *Revista Rebeldía / La Fogata*
- Marcusse, Herbert** (1996), *Socialismo o Barbarie, Entrevista*. Materiales de Sociología Crítica. Edit. La Piqueta. Madrid, 1996.
- Mora Rodríguez** (2003). *Política y violencia, discusiones en la web* (2003)
- Sevares, Julio**. (2003). *El Capitalismo Criminal. Gobiernos, bancos y empresas en las redes del delito global*. Edit. Norma. Buenos Aires, 2003.